



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Medio de control:</b> | Protección de Derechos e Intereses Colectivos                          |
| <b>Demandante:</b>       | Municipio de Tunja   |
| <b>Demandado:</b>        | Servigenerales Ciudad de Tunja S.A. E.S.P. –<br>Servitunja S.A. E.S.P. |
| <b>Radicación:</b>       | 150013333 004 2019 00258 00  |

### ASUNTO

El Despacho procede a estudiar si está investido de jurisdicción para conocer el asunto de la referencia.

### ANTECEDENTES

- El municipio de Tunja, a través de apoderado judicial, formuló demanda para la Protección de Derechos e Intereses Colectivos (Acción Popular) contra Servigenerales Ciudad de Tunja S.A. E.S.P. – Servitunja S.A. E.S.P., con el fin de que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa y defensa del patrimonio. En consecuencia, solicitó se revoque o declare nula la reforma de estatutos de la sociedad Servigenerales Ciudad de Tunja S.A. E.S.P., contenida en el acta de asamblea General Ordinaria de Accionistas Servitunja S.A. E.S.P., de fecha 28 de diciembre de 2015.
- El asunto fue conocido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, quien mediante auto de 1.º de agosto de 2019 (f. 140), dispuso la admisión de la demanda; la notificación de las partes y el Ministerio Público, además, de decretar la medida cautelar solicitada por el ente territorial accionante.
- Realizado en debida forma el trámite de notificación a la demandada y publicado el aviso a la comunidad, la parte pasiva dio oportuna contestación a la demanda, y se opuso a la medida cautelar decretada mediante recurso de reposición (fs. 165-189 y 466-493).
- A través de providencia fechada 14 de noviembre de 2019, el Juzgado consideró que carecía de jurisdicción para conocer la demanda, para lo cual invocó el contenido del numeral 2.º del artículo 104 y el numeral 5.º del artículo 155 del CPACA, al considerar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce las acciones populares contra personas privadas que desempeñen función administrativa. En consecuencia, rechazó la demanda y ordenó remitir las diligencias a la Oficina de Reparto de los Juzgados

Administrativos de Tunja, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (f. 776).

### CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo antecedentes, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja dispuso la remisión de esta acción popular para el conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al considerar, según las normas citadas en el auto de 14 de noviembre de 2019<sup>1</sup>, que la misma se encuentra instituida para conocer de las controversias relativas a contratos, cualquiera que sea su régimen, en las que una parte sea un particular en ejercicio de funciones administrativas.

Ahora bien, la regla general de competencia para el medio de control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos se encuentra consagrada en el artículo 15 de la Ley 478 de 1998, al señalar:

**“Artículo 15. Jurisdicción.** La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.

*En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil.”*

A su turno, el numeral 10.º del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, en materia de competencia de los Juzgados Administrativos, dispone lo siguiente:

**“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

*10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.”*

En este entendido, esta jurisdicción conoce de las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de entidades o autoridades públicas del orden departamental, distrital, municipal o local y de **personas privadas que**

---

<sup>1</sup> Numeral 2 del artículo 104 y el numeral 5 del artículo 155 del CPACA

**desempeñen función administrativa**, lo que impone examinar si la conducta atribuida a la entidad demandada Servitunja S.A. E.S.P., de la cual se desprende la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, se efectuó en ejercicio de dicha función.

Para ello, sea lo primero señalar que, el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 establece la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios en el siguiente sentido:

***“Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.***

***La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.***” - Negrillas del Despacho

Es decir, para el asunto particular, según la naturaleza jurídica de la sociedad demandada, incluso con participación accionaria del municipio de Tunja en 30%, por disposición de la ley sus actos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado.

En el caso concreto, según la demanda, la violación del derecho a la moralidad administrativa se deriva de la modificación que hicieron los miembros de la sociedad, mediante asamblea general de accionistas, respecto a la duración de la sociedad anónima, sin que mediara una autorización del Concejo Municipal para tal efecto. Esta circunstancia, a juicio del Despacho, se traduce en una modificación de los estatutos y, por tanto, se trata de un tema inherente a la situación de la sociedad, pero no el ejercicio de una función administrativa propiamente dicha, en la medida que la duración no implica una manifestación de las potestades inmanentes al Estado.

Luego, no resultan aplicables las reglas de competencia invocadas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, máxime, que no se pretende dirimir una controversia de índole contractual respecto a la empresa de servicios públicos accionada, sino que son aplicables las reglas del derecho privado respecto a la demandada, por tratarse de un acto propio de la empresa relacionado con la duración de la sociedad, y ello no supone el cumplimiento de una función administrativa.

Así las cosas, bajo las especiales reglas del artículo 15 de la Ley 478 de 1998, como el acto que da lugar al ejercicio de la acción popular no tiene como fundamento el desempeño de funciones administrativas, al tratarse de una persona jurídica de derecho privado el competente es el juez de la Jurisdicción Ordinaria.

Para reforzar esta conclusión, valga mencionar que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria<sup>2</sup>, al resolver un conflicto de competencia de similares contornos, expresó lo siguiente:

*“Ahora bien, volviendo al caso que nos ocupa, se debe advertir que independientemente de haberse vinculado en la acción constitucional a la referida municipalidad de Melgar y a la Empresa de Servicios Públicos de Melgar “Empumelgar E.S.P.”, es claro que el presunto sujeto vulnerado del derecho colectivo es la Sociedad en Comandita por Acciones “Hydro Melgar S. en C.A. E.S.P.”, toda vez que ciertamente es esa Sociedad la que tiene a cargo el mantenimiento de la totalidad de redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de Melgar – Tolima-, y la cual, por regla general, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, se encuentra sometida al régimen de derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la misma ley, con independencia en su naturaleza- Estatal, Mixta o Privada-,*

*(...)*

*De lo anterior se colige, que las empresas de servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento de las actividades que desarrollan, deben someterse al régimen del derecho privado, siendo competente para conocer de las controversias derivadas de sus actos u omisiones, la jurisdicción ordinaria, dejando a salvo, desde luego, los asuntos que por vía de excepción la misma ley reservó al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”*

En ese orden, este proceso no resulta de conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino que corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, a través del Juez Cuarto Civil del Circuito de Tunja, que conoció de forma primigenia el asunto, por tanto, este Despacho Judicial se abstendrá de avocar conocimiento y propondrá **conflicto negativo de competencias** para conocer del presente asunto, conforme lo estipula el artículo 139 del CGP<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria. Magistrado Ponente: Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO. Providencia del 10 de diciembre 2012. Radicación. 2243-12. Conflicto Negativo de competencias entre la Jurisdicción Ordinaria y el Jurisdicción Contencioso Administrativa.

<sup>3</sup> Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se

Ahora bien, en atención a que el conflicto negativo de competencias planteado se suscitó entre juzgados de diferente jurisdicción, de conformidad con lo estipulado en el numeral 6.º del artículo 256 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 2.º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, el competente para dirimirlo es el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

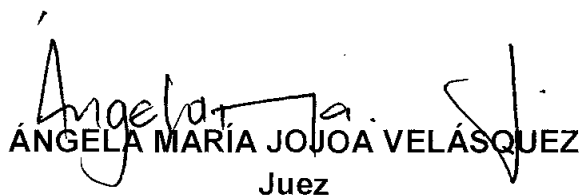
### RESUELVE

**PRIMERO:** Declarar que este Juzgado **carece de jurisdicción** para adelantar el presente proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Proponer el **conflicto negativo de competencia** para el conocimiento del presente asunto, de acuerdo a lo indicado en la motivación.

**TERCERO:** Por Secretaría, **remitir** el expediente por intermedio del Centro de Servicios para los Juzgados Administrativos de Tunja, al Consejo Superior de la Judicatura, para que resuelva el conflicto negativo de competencia planteado, dejando las anotaciones a que haya lugar.

### Notifíquese y cúmplase

  
ÁNGELA MARÍA JOOJA VELÁSQUEZ  
Juez

|  |
|--|
| <p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL<br/>CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO<br/>ELECTRÓNICO</p> <p>Nº <u>3</u> De hoy 7 de febrero de 2020<br/>a las 8:00 a.m.</p> <p><br/>FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ<br/>SECRETARIO</p> |
|--|

CEAP

decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso... (Subrayado del Despacho).

<sup>4</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 7 de febrero de 2020 en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co). Ferney Mauricio Díaz Hernández— Secretario.